

**“Análisis proyectos de ley ingresados al Senado para regular y sancionar el mal uso de licencias médicas”.**

**I.- Introducción.**

El presente trabajo, tiene por objeto principal analizar dos proyectos de ley que han sido ingresados al Senado de la República vía moción parlamentaria a propósito del escándalo por el mal uso de licencias médicas que detectó la Contraloría General de la República en su “Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica”, que fuera dado a conocer a la opinión pública el pasado 20 de mayo y en el cual se concluye que durante los años 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante el período de reposo indicado en sus licencias médicas.

A propósito de dicho informe de fiscalización del ente contralor, se ingresaron dos mociones parlamentarias al Senado, las cuales básicamente tienen como finalidad endurecer las sanciones a quienes hacen mal uso de dichas licencias médicas, uno de los proyectos de ley está enfocado en las sanciones de carácter administrativas en contra de los funcionarios públicos y municipales que cometan tales abusos y el otro proyecto de ley además de abordar sanciones administrativas para trabajadores del Estado y para los trabajadores régidos por el Código del Trabajo, propone modificar al Código Penal introduciendo una nueva figura penal por el uso indebido de licencias médicas.

En efecto, con fecha 10 de junio del presente año, fue ingresado a la Cámara Alta, la moción de los Senadores señores Edwards, Gahona, Kast, Moreira y Sanhueza, titulado, “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo”, boletín N° 17.593-06.

Al día siguiente, el 11 de junio, se dio cuenta en la Sala del proyecto de ley y pasó para su estudio y discusión a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Previamente al proyecto de ley ya referido, con fecha 28 de mayo ingresó al Senado de la República la moción parlamentaria suscrita por los Senadores señora Rincón, y señores Walker, Castro González, Chahuán y Flores, titulado “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica.”, boletín N° 17.563-11.

Se dio cuenta de esta iniciativa legal en la Sala de la Cámara Alta el 3 de junio pasado, y pasó para su estudio y discusión a la Comisión de Salud del Senado.

**Fuentes del capítulo:** Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica; Proyecto de ley “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o

fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo”, boletín Nº 17.593-06; Proyecto de ley “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica”, boletín Nº 17.563-11; Página web del Senado.

## **II.- Información de contexto.**

Con el objeto de entender de mejor manera, cual fue el contexto en el cual se presentaron las dos mociones parlamentarias que serán analizadas en este informe, enseguida doy cuenta de la información que entregó la Contraloría General de la República en su página web, dando a conocer de esta manera el día 20 de mayo pasado a la opinión pública, el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica.

Bajo el título: **“CIC: Más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país durante licencias médicas”**, el ente contralor informa en su página web textualmente lo siguiente:

**“El informe de la Contraloría General de la República indica también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 permisos médicos.**

De acuerdo con el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El nuevo reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.

El informe de la CGR indica que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Otros datos del análisis de la Contraloría revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica. Sin embargo 13 servicios concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719.

Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10,0%)

### **Normativa**

La licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o

reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración.

El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otras cosas y en caso de que corresponda, el tipo de reposo para su afección (total o parcial); el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección y teléfono. Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica concedida, cuando exista un incumplimiento del reposo indicado en la licencia.

En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5.145.997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen 1.231.362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período.”

Fuentes del capítulo: Información de 20 de mayo pasado, publicada en la página web de la Contraloría General de la República, relativa al Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica.

### **III. “Análisis proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo, boletín N° 17.593-06.”**

En este capítulo analizaré el proyecto de ley indicado, el que tal como se anunciara en la introducción del presente informe, es de autoría de los Senadores Señores Rojo Edwards, Sergio Gahona, Felipe Kast, Iván Moreira y Gustavo Sanhueza.

Enseguida reproduciré el texto del proyecto de ley y paralelamente analizaré su contenido, para dichos efectos y con el objeto de poder diferenciar más fácilmente el texto del proyecto del análisis del suscrito, el proyecto se reproducirá en una letra más pequeña, en negrilla y cursiva.

*“Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Edwards, Gahona, Kast, Moreira y Sanhueza, que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo.*

*La probidad administrativa y la continuidad del servicio público son pilares fundamentales del funcionamiento del Estado. En ese contexto, la presente iniciativa legal busca fortalecer el marco normativo aplicable a los funcionarios públicos y municipales, mediante el perfeccionamiento de las causales de destitución y de evaluación por salud incompatible con el cargo.”*

Lo primero que se debe destacar, es que este proyecto de ley propone modificaciones legales que solamente afectarían a los funcionarios públicos y municipales, proponiendo en consecuencia como analizaremos más adelante modificaciones al Estatuto Administrativo ley N° 18.834 y al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley N° 18.833.

Los ámbitos en los que se proponen las modificaciones son en relación a las sanciones administrativas para aquellos funcionarios públicos o municipales que hagan uso de certificados médicos falsos y en ambos casos también modificar las reglas respecto la salud incompatible con el cargo.

*“En los últimos años, ha quedado en evidencia una creciente preocupación ciudadana y política por el uso irregular o abusivo de licencias médicas en el sector público. De acuerdo con antecedentes oficiales, Chile ha experimentado un aumento sostenido en el número de licencias médicas, especialmente en el sector público, tanto en volumen como en duración. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en el año 2022 se emitieron más de 9 millones de licencias médicas, con una carga financiera que superó los \$1,3 billones de pesos, afectando no solo al sistema de salud, sino también a la operatividad de las instituciones.”*

En este punto es importante entregar mayores antecedentes con el fin de apreciar de mejor manera el real incremento de licencias médicas que ha experimentado el sector público en los últimos años, incluyendo los siguientes datos a las Municipalidades.

En efecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe de la Dirección de Presupuesto de diciembre de 2024, titulado “Radiografía del ausentismo laboral en el sector público”, la cantidad de licencias médicas ha evolucionado de la siguiente manera:

- **Año 2019 la cantidad de 6.150.303 licencias médicas**
- **Año 2020 la cantidad de 6.080.625 licencias médicas**
- **Año 2021 la cantidad de 8.508.008 licencias médicas**
- **Año 2022 la cantidad de 9.571.195 licencias médicas**
- **Año 2023 la cantidad de 8.401.133 licencias médicas**

Si bien dichos datos están distorsionados por los efectos de la pandemia del Covid 19, en particular los años 2021 y 2022, una comparación más real y objetiva de la evolución en la cantidad de licencias médicas es aquella que podemos hacer en los años inmediatamente anterior y posterior de la pandemia, esto implica comparar el año 2020 respecto el año 2023, donde podemos apreciar un aumento significativo de ellas, pasando desde 6.080.625 licencias médicas el año 2020 a 8.401.133 el año 2023.

Como consecuencia de lo anterior, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado considerablemente en los últimos años debido a este aumento de licencias médicas, ya que los otros factores que inciden en el ausentismo laboral se han mantenido prácticamente en los mismos índices, tales como las licencias y permisos parentales, otros permisos pagados y sin goce de remuneraciones.

En efecto, el ausentismo laboral que el año 2018 llegaba a un 25,9%, el año 2023 aumento a un 31.8%, ellos debido fundamentalmente al aumento de las licencias médicas no parentales que aumentaron en dicho período de una 15,7% a un 22,3%, experimentando en consecuencia un aumento de un 42% en esos 5 años.

A modo de antecedente, tal como se infiere de los datos entregado en el informe de la Dirección de Presupuesto, del año 2006 a la fecha casi se ha duplicado el porcentaje de ausentismo laboral, en efecto el año 2006 el ausentismo laboral era de un 17.3% y el año 2023 como ya señalamos llegó a un 31.8%.

*“Esta situación ha derivado en múltiples investigaciones por licencias falsas, adulteradas, extendidas por médicos no habilitados o utilizadas para encubrir viajes y otras actividades incompatibles con la prescripción médica. En algunos casos, se ha detectado incluso la existencia de redes organizadas para la venta de licencias fraudulentas. Ello no solo constituye una infracción a la ética profesional y administrativa, sino también una afectación directa al principio de probidad que rige a todo funcionario público.*

*Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder, es deber del legislador dotar al ordenamiento jurídico de herramientas eficaces para sancionar y prevenir estas conductas. El presente proyecto propone agregar una nueva causal específica de destitución en los estatutos del sector público y municipal, referida al uso fraudulento de licencias médicas. La redacción propuesta no solo tipifica la conducta en términos generales, sino que además detalla supuestos especialmente graves, como la falsificación documental y el abandono territorial sin autorización.*

*En segundo lugar, se introduce una modificación al artículo que regula la figura de la salud incompatible. Actualmente, dicha figura se activa solo cuando el funcionario ha hecho uso de licencias por más de seis meses en los últimos dos años. Esta regla resulta excesivamente laxa, permitiendo que funcionarios con un nivel de ausentismo significativo puedan mantener su cargo sin evaluación efectiva. Se propone reemplazar dicha fórmula por una más estricta y adecuada a los estándares de eficiencia institucional: siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año.*

*La medida no busca afectar a quienes padecen enfermedades reales o condiciones incapacitantes, sino establecer criterios objetivos para cuando una prolongada inasistencia impide razonablemente el ejercicio efectivo del cargo.*

*La modificación también entrega certidumbre a las jefaturas de servicio y a los alcaldes para actuar ante casos que, aún sin constituir fraude, evidencien una clara incompatibilidad entre el estado de salud del funcionario y las exigencias de su cargo.*

*En definitiva, este proyecto busca resguardar el buen uso de los recursos públicos, la confianza ciudadana en el aparato estatal y la continuidad de los servicios, promoviendo al mismo tiempo una cultura de responsabilidad, ética y transparencia en la función pública.*

*Por dichas consideraciones sometemos a aprobación del H. Congreso el siguiente proyecto de ley:*

**Artículo 1<sup>o</sup>.** - *Introdúcense las siguientes modificaciones en el Estatuto Administrativo, contenido en la ley N° 18.834:”*

La primera modificación propuesta que enseguida se reproduce y analiza, se refiere a introducir una nueva causal de destitución al artículo 125 del estatuto administrativo para funcionarios públicos.

Actualmente dicho artículo que se encuentra en el título V del referido Estatuto, titulado “De la responsabilidad administrativa”, establece las causales por las cuales la

autoridad correspondiente puede imponer a un funcionario la medida disciplinaria de destitución.

Las medidas disciplinarias están singularizadas en el artículo 121 del Estatuto Administrativo y son considerando de la más leve a la más grave, la Censura, la Multa, la Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y la Destitución.

Además de las causales de destitución que establecen los literales del artículo 125 del Estatuto Administrativo, el inciso segundo del referido artículo establece que dicha medida disciplinaria de destitución procederá también cuando “los hechos vulneren gravemente el principio de probidad administrativa”.

El principio de probidad lo define el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, al siguiente tenor: **“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”**

Por su parte, las causales de destitución que establece textualmente en sus literales el artículo 125 del Estatuto Administrativo son las siguientes:

- a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;
- b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84;
- c) Condena por crimen o simple delito, y
- d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.
- e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.
- f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.

***“1. Intercálase la siguiente letra f) en el artículo 125, pasando la actual letra f) a ser letra g):***

***“f) Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes. Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, entre otros, los siguientes casos:***

- i) presentar certificados falsos, adulterados o extendidos por profesionales no habilitados; o utilizar licencias médicas para encubrir el abandono injustificado del territorio nacional o desplazamientos dentro del país. Estas conductas se considerarán especialmente agravadas ante el incumplimiento, retardo o entorpecimiento de los procesos de fiscalización dispuestos por la autoridad para verificar el cumplimiento efectivo del reposo prescrito:***
- ii) emitir boletas o facturas por servicios correspondientes a actividades realizadas durante el período cubierto por el reposo médico, o desempeñarse laboralmente para otro empleador o por cuenta propia***

*en dicho período;*

*iii) participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, o en cualquier otra actividad que sean incompatibles con el reposo o modalidad prescrita por la licencia; o en actividades de campañas políticas, partidarias o gremiales durante el período de reposo;*

*iv) incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.*

Como podemos apreciar, el proyecto de ley propone incorporar esta nueva causal de destitución en la letra f) del artículo 125 del Estatuto Administrativo

La particularidad de esta nueva casual de destitución que propone la iniciativa legal, dice relación con que luego de describir la causal consistente en “Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes”, plantea en cuatro numerales una serie de hipótesis en las cuales se configura dicha causal, sin que ellas sean de carácter taxativas.

En efecto, luego de describir la nueva causal el proyecto de ley en el encabezado de la letra f) continúa señalando que: “Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, **entre otros**, los siguientes casos:” (Lo destacado en negrilla es del suscrito)

Al señalar la frase “entre otros”, claramente el proyecto de ley deja abierta la posibilidad que existan otros casos o hipótesis en las cuales se incurra en la nueva causal de destitución propuesta, además de las que expresamente plantea la norma.

Previo al análisis de las hipótesis que describe la nueva letra f) propuesta para el artículo 125 del Estatuto Administrativo, es importante hacer presente, que los casos que plantean los cuatro numerales de la nueva causal que se propone, en su gran mayoría no dicen relación con la causal propiamente tal.

En efecto, la causal se refiere a “utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes” y solamente en la primera parte del numeral (i) hace referencia a dicha conducta al señalar que: “Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes.”

En todos los demás casos que plantea tanto dicho numeral como los numerales (ii), (iii) y (iv), se refiere a conductas que dicen relación con la vulneración del reposo indicado en la licencia médica, pero no necesariamente con la falsedad de ella.

En consecuencia, el proyecto de ley en esta parte, no solamente propone introducir una nueva causal de destitución referida a la utilización de certificado médicos falsos, sino que, dicha causal también propone aplicarla a quienes no cumplan con el reposo médico, efectuando viajes dentro o fuera del territorio nacional; realizar actividades laborales por cuenta propia o como dependiente; participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, gremiales o políticas y por último establece de manera más genérica consistente

en “incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.

***“2. Reemplázase el inciso primero del artículo 151 por el siguiente:***

***“El Jefe superior del servicio podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Jefe superior del servicio deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.”.***

Esta modificación tal como lo señala textualmente el proyecto de ley en sus fundamentos se debe a que **“Actualmente, dicha figura se activa solo cuando el funcionario ha hecho uso de licencias por más de seis meses en los últimos dos años. Esta regla resulta excesivamente laxa, permitiendo que funcionarios con un nivel de ausentismo significativo puedan mantener su cargo sin evaluación efectiva. Se propone reemplazar dicha fórmula por una más estricta y adecuada a los estándares de eficiencia institucional: siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año.”**

En efecto, el actual y vigente artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual se encuentra ubicado en el título VI de dicho cuerpo legal, denominado “De la cesación de funciones”, establece textualmente que: **“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.**

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito y corresponde al inciso que se propone modificar, los otros dos incisos reproducidos se mantendrían).

Como se puede apreciar de la comparación de la norma actualmente vigente en esta materia con la norma propuesta, sin duda que la norma propuesta al señalar que se configura la causal de salud incompatible con siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año, permitiría al jefe de Servicio declarar la salud incompatible de un funcionario con un mayor grado de flexibilidad.

***“2. Agrégase al artículo 151 el siguiente inciso final:***

***“El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como una falta administrativa grave.”.***



Esta propuesta de modificación, si bien no está explicada en los fundamentos del proyecto de ley y tampoco es clara la redacción de este inciso final propuesto, se entiende en el sentido de hacer exigible al Jefe Superior de Servicio que si los nuevos plazos de la licencia médica que propone la norma se extienden por un mes adicional **deberá** requerir la evaluación del COMPIN, es decir, el decir el Jefe de Servicio si no inicia el proceso para declarar la salud incompatible del funcionario, dicha omisión será considerada como una falta administrativa grave.

En efecto, la norma actualmente está redactada como una facultad del Jefe de Servicio en esta materia, al señalar en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo que “**podrá** considerar como salud incompatible” o en el inciso final al indicar que “El jefe superior del servicio, para ejercer la **facultad** señalada en el inciso primero”.

En definitiva y para una mejor comprensión, enseguida paso a reproducir como quedaría redactado el artículo 151 del Estatuto administrativo si fuera aprobado en los mismos términos el proyecto de ley en estudio, destacando en negrilla la parte reemplazada (inciso primero) y en negrilla y subrayado la parte nueva de la norma (inciso final).

**“El Jefe superior del servicio podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Jefe superior del servicio deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.**

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

**El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como una falta administrativa grave.”**

***“Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Estatuto de los Funcionarios Municipales, contenido en la ley N° 18.883:”***

Enseguida el proyecto de ley, propone básicamente las mismas modificaciones al Estatuto Administrativo que hemos analizado previamente, para el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, contenido en la ley N° 18.883, obviamente con las adecuaciones pertinentes en virtud de las particularidades distintas de las instituciones a las cuales se aplica cada uno de los estatutos.

Es así como por ejemplo, cuando se propone regular la salud incompatible, en lugar de referirse al Jefe Superior del Servicio se refiere al Alcalde, o bien, en este mismo tema, a propósito de la sanción por no iniciar el proceso de Salud Incompatible, para el Alcalde, será considerado notable abandono de deberes cuando este incumplimiento sea de manera reiterada, en cambio como vimos en el Estatuto Administrativo, para el jefe Superior del Servicio no requiere ser de manera reiterada y es considerada una falta grave.

En consideración de lo anterior y con el objeto de no ser redundante, se dan por reproducidas las explicaciones de las normas propuestas anteriormente para las siguientes normas que se reproducen propuestas por el proyecto de ley para modificar el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley N° 18.883.

***“1. Intercálase la siguiente letra g) en el artículo 123, pasando la actual letra g) a ser letra h):***

***“g) Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes. Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, entre otros, los siguientes casos:***

***i) presentar certificados falsos, adulterados o extendidos por profesionales no habilitados; o utilizar licencias médicas para encubrir el abandono injustificado del territorio nacional o desplazamientos dentro del país. Estas conductas se considerarán especialmente agravadas ante el incumplimiento, retardo o entorpecimiento de los procesos de fiscalización dispuestos por la autoridad para verificar el cumplimiento efectivo del reposo prescrito;***

***ii) emitir boletas o facturas por servicios correspondientes a actividades realizadas durante el período cubierto por el reposo médico, o desempeñarse laboralmente para otro empleador o por cuenta propia en dicho período;***

***iii) participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, o en cualquier otra actividad que sean incompatibles con el reposo o modalidad prescrita por la licencia; o en actividades de campañas políticas, partidarias o gremiales durante el período de reposo;***

***iv) incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos por la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.***

***2. Reemplázase el inciso primero del artículo 148 por el siguiente:***

***“El Alcalde podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Alcalde deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.”.***

***3. Agrégase al artículo 148 el siguiente inciso final:***

***“Él incumplimiento reiterado de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como un notable abandono de deberes.”.***

Fuentes del capítulo: Proyecto de ley “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud

incompatible con el cargo”, boletín Nº 17.593-06; Informe de la Dirección de Presupuesto de diciembre de 2024, titulado “Radiografía del ausentismo laboral en el sector público; Estatuto Administrativo, ley Nº 18.884; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales, ley Nº 18.883.

#### **IV. “Análisis proyecto de ley que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica, boletín Nº 17.563-11.”**

En este capítulo analizaré el proyecto de ley indicado, el que tal como se anunciara en la introducción del presente informe, es de autoría de la Senadora señora Ximena Rincón y de los Senadores señores Matías Walker, Juan Luis Castro, Francisco Chahuán e Iván Flores.

Enseguida reproduciré el texto del proyecto de ley y paralelamente analizaré su contenido, para dichos efectos y con el objeto de poder diferenciar más fácilmente el texto del proyecto del análisis del suscrito, al igual que la iniciativa legal analizada en el capítulo anterior, el proyecto de ley se reproducirá en una letra más pequeña, en negrilla y cursiva.

*“Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Rincón, y señores Walker, Castro González, Chahuán y Flores, que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica.*

*Considerando,*

- 1. Que, según lo informado por la Contraloría General de la República en su Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025, durante el período 2023- 2024 se detectaron 25.078 funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos que habrían hecho uso de licencias médicas mientras viajaban fuera del país, vulnerando la finalidad de las mismas, cuyo propósito es permitir la recuperación del trabajador ante una condición de salud que le impide desempeñar sus funciones. Configurando así un uso irregular de 35.585 licencias médicas y registrando 59.575 movimientos migratorios durante dichos períodos de licencia.*
- 2. Que la normativa vigente, en particular lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), establece que las licencias médicas sólo pueden ser validadas si el reposo prescrito se cumple, y que su incumplimiento, especialmente con salidas del país, puede dar lugar al rechazo de la licencia, la pérdida del subsidio y eventuales responsabilidades administrativas y penales.*
- 3. Que la propia Contraloría, en cumplimiento del artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo y del Código Procesal Penal, remitió todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, instruyendo además a más de 700 entidades públicas la apertura inmediata de sumarios administrativos para investigar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.*
- 4. Que el uso fraudulento de licencias médicas, en muchos casos con evidencia pública de viajes de placer e incluso participación en actividades comerciales o electorales durante los períodos de supuesta incapacidad laboral, constituye no sólo una falta administrativa grave, sino también una afectación directa al erario público y al principio de probidad que rige la función pública.*
- 5. Que este tipo de prácticas ha alcanzado una dimensión estructural, al punto que la propia Contralora General de la República advirtió ante el Congreso Nacional que existían redes informales que promovían abiertamente la venta de licencias médicas falsas a través de redes sociales y grupos de mensajería, lo que refuerza la necesidad de respuestas legislativas eficaces que restauren la confianza*

*pública en el sistema.*

6. *Que, en paralelo, el Ministerio de Hacienda informó que 131 instituciones públicas han iniciado sumarios administrativos, en respuesta al escándalo, y creó una Comisión de Ausentismo Laboral en el Estado, lo que evidencia la magnitud y transversalidad del fenómeno.*

7. *De esta manera, la gravedad del caso no radica únicamente en el volumen de estos casos y su costo para el erario público, sino también en el hecho de que afecta directamente la eficiencia del Estado: funcionarios ausentes injustificadamente debilitan la capacidad del aparato público para cumplir su rol, y perjudican a sus equipos y a la ciudadanía.*

8. *Que, dada la obligación del Estado de proteger los recursos públicos y sancionar su uso indebido, resulta indispensable establecer mecanismos legales eficaces para garantizar la restitución de los montos indebidamente percibidos por quienes, amparándose en una licencia médica, vulneraron las condiciones que habilitan el goce del subsidio o remuneración correspondiente.*

9. *Que, la gravedad del falseamiento de antecedentes médicos con el objeto de obtener licencias indebidas, y el aprovechamiento de subsidios públicos sin causal legítima, constituye un atentado directo contra la ética del servicio público y el principio de legalidad que rige a quienes desempeñan funciones financiadas por el Estado.*

10. *Que, la Contraloría General de la República ha establecido que las conductas descritas en su Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025 no se limitan exclusivamente a funcionarios públicos de planta o contrata, sino que abarcan también a trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos, y a prestadores de servicios a honorarios en el sector público, todos los cuales se encuentran sujetos a estándares mínimos de probidad y responsabilidad en el uso de recursos fiscales.*

11. *Que el Código del Trabajo, en sus disposiciones sobre justificación de ausencias y uso de licencias médicas, establece que el descanso debe corresponder efectivamente a una incapacidad laboral temporal, y que el incumplimiento del reposo médico constituye una causal objetiva de término del contrato de trabajo.*

12. *Que, de igual forma, los prestadores de servicios a honorarios bajo la Ley N° 18.834 o cualquier normativa especial, y cuyas funciones estén financiadas con recursos públicos, tienen el deber de ajustarse a los principios de responsabilidad y buena fe contractual, por lo que el uso fraudulento de licencias médicas debe habilitar la terminación inmediata del vínculo contractual sin derecho a indemnización alguna.*

13. *Que, en todos estos casos, se hace necesario establecer una sanción proporcional en función de la gravedad de la infracción y su impacto sobre el sistema de seguridad social y el correcto uso de los recursos públicos:*

a) *La desvinculación inmediata del trabajador cuando se acredite el uso doloso o fraudulento de licencias médicas.*

*Esta medida se justifica en razón del principio de buena fe que rige las relaciones laborales, y del deber de veracidad que impone al trabajador no simular una incapacidad laboral. La utilización dolosa de un instrumento médico para obtener beneficios indebidos configura un incumplimiento grave de las*

*obligaciones contractuales, ya sea en el ámbito público o privado, por lo que la desvinculación debe operar como sanción inmediata, sin perjuicio de otras acciones legales.*

**b) La inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.**

*Este tipo de sanción extrema es necesaria cuando se afecta gravemente la fe pública. La licencia médica es un instrumento de protección social, y su utilización fraudulenta por parte de quienes deben ser ejemplo de conducta cívica compromete la legitimidad del aparato estatal. Por tanto, la inhabilitación perpetua responde a una lógica de defensa del bien común, y no meramente punitiva, reforzando estándares mínimos de integridad en el servicio público.*

**c) La restitución obligatoria de los montos percibidos indebidamente, ya sea como subsidio por incapacidad laboral, honorarios o remuneraciones ordinarias.**

*La devolución de estos recursos es coherente con el principio de responsabilidad en la gestión pública y privada. Toda persona que haya recibido pagos por un supuesto estado de incapacidad no verificado o simulado, debe devolver dichos fondos al sistema que fueron indebidamente cargados, a fin de proteger la sustentabilidad financiera de la seguridad social y del Estado.*

**14. Que estas medidas no solo buscan sancionar el uso indebido de recursos públicos, sino también prevenir nuevas prácticas de fraude laboral, reforzando los mecanismos de control y fiscalización, tanto en el sector público como en el privado cuando exista financiamiento estatal.**

*En virtud de los considerandos anteriormente enunciados, y en especial, para evitar nuevos fraudes, debe incorporarse un procedimiento de restitución ex post a través del sistema tributario, usando mecanismos existentes, sin incurrir en gasto fiscal ni crear nuevas figuras tributarias. Todo ello, en el marco del principio de responsabilidad fiscal, el respeto a la legalidad vigente y conforme a las facultades constitucionales que nos asisten, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley.*

#### **PROYECTO DE LEY**

**Artículo 1º.-** Los funcionarios públicos y trabajadores de entidades que integran la Administración del Estado, incluyendo ministerios, subsecretarías, gobiernos regionales, municipalidades, servicios públicos centralizados y descentralizados, universidades estatales, empresas públicas y cualquier otro órgano, entidad o institución que administre, reciba o ejecute recursos públicos, así como del Congreso Nacional y Poder Judicial, que hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, incurrirán en una vulneración grave de los principios de probidad, legalidad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función pública.

*Dicha infracción será considerada causal suficiente para la cesación inmediata de sus funciones, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan, conforme a la normativa vigente.”*

Este primer artículo del proyecto de ley, con una técnica legislativa distinta que la iniciativa legal analizada en el capítulo anterior y con una mayor amplitud de trabajadores sujetos a una eventual sanción, impone el cese inmediato de sus funciones a quienes “hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades

manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

En efecto, en el capítulo anterior, analizamos la norma propuesta que propone tanto para los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos como para el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la incorporación de una nueva causal de la medida disciplinaria de destitución.

En este artículo 1º del proyecto de ley en cambio, no solamente abarca a funcionarios sujetos a dichos estatutos, sino que además incorpora a funcionarios y trabajadores de “cualquier otro órgano, entidad o institución que administre, reciba o ejecute recursos públicos, así como del Congreso Nacional y Poder Judicial”, los cuales no necesariamente están sujetos a las normas del estatuto administrativo.

En efecto, los trabajadores del Congreso Nacional están sujetos a sus reglamentos propios para la gestión de su personal y en el caso del Poder Judicial sus trabajadores están sujetos a las normas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales, a los Autoacordados de la Excm. Corte Suprema y al Reglamento del personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Otra diferencia, en relación a la causal que establece el proyecto analizado en el capítulo anterior, se refiere a que dicho proyecto además de sancionar la conducta relativa a utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes, sanciona además una serie de conductas que dicen relación con la vulneración del reposo indicado en la licencia médica y no necesariamente con la falsedad de dichas licencias.

En cambio este proyecto de ley no se refiere expresamente a sancionar a quienes utilicen licencias médicas falsas o fraudulentas, sino que a su uso irregular, coincidiendo en ello con el proyecto analizado en el capítulo anterior, pero en este proyecto redactado de una manera más genérica al señalar textualmente en su parte pertinente “mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

Por último y tal como se esbozó previamente, este proyecto de ley a diferencia del analizado anteriormente que propone incluir la infracción como nueva causal de destitución en ambos estatutos administrativos, sanciona la infracción con la cesación inmediata de sus funciones, lo que se entiende en virtud que su ámbito de aplicación va más allá que los trabajadores regidos por los estatutos administrativos indicados.

***Artículo 2º.- Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, incurrirán en una infracción grave a las obligaciones que impone la relación laboral.***

*Dicha conducta será considerada causal suficiente para la terminación del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales, civiles o penales que puedan derivarse, así como de la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente.*

Este artículo propuesto, describe de manera idéntica la conducta que analizamos en el artículo 1º de esta iniciativa legal, pero ahora en relación a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que son la gran parte de los trabajadores del país que se desempeñan mayoritariamente en la empresa privada.

Ahora bien, en relación a la calificación que hace el proyecto de ley de la infracción, el inciso primero del artículo propuesto señala que dicha conducta constituye una **“infracción grave a las obligaciones que impone la relación laboral”**, en cambio en el artículo anterior propuesto, la infracción la califica como **“una vulneración grave de los principios de probidad, legalidad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función pública.”**

En lo que se refiere a la sanción que propone el proyecto de ley, la consecuencia como veremos enseguida es la misma que la establecida en el artículo anterior del proyecto de ley y consiste básicamente en poder poner término a la relación laboral con el trabajador.

En efecto, la norma propuesta señala que “dicha conducta será considerada causal suficiente para la terminación del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo”.

El artículo 160 del Código del Trabajo establece una serie de causales mediante las cuales el empleador puede poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización para el trabajador, dichas casuales son conocidas en la doctrina como casuales disciplinarias o causales de autodespido por incumplimiento grave del trabajador.

Como veremos las conductas de los trabajadores que establece el artículo son particularmente graves y es precisamente a ese tipo de conductas que el proyecto de ley asocia la infracción de hacer uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada.

En efecto, el artículo 160 del Código del Trabajo, establece textualmente lo siguiente: **“El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:**

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

- a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
- b) Conductas de acoso sexual;
- c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;

- d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
  - e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
  - f) Conductas de acoso laboral.
- 2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
- 3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
- 4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
- a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
  - b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.
- 5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
- 6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

**7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”** (Lo destacado en negrilla es del suscrito)

El proyecto de ley, sin necesidad de modificar el Código del Trabajo, propone establecer que la infracción consistente en hacer uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, sea considerada suficiente para terminar la relación laboral por constituir dicha conducta la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo consistente en el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

Por último, la norma propuesta señala expresamente la obligación del trabajador de restituir subsidios percibidos indebidamente, obligación que no se encuentra establecida expresamente en el Código del Trabajo.

***Artículo 3º.- Los trabajadores regidos por regímenes especiales, incluidos quienes prestan servicios a honorarios, estarán sujetos a iguales sanciones en caso de verificarse el uso irregular de licencias médicas, incluyendo la terminación inmediata del vínculo contractual vigente.***

Si bien no lo señala expresamente el artículo, se puede presumir que esta norma se refiere a los trabajadores que prestan servicios a honorarios en el sector público y no en el sector privado por las siguientes razones.



a).- Los trabajadores que prestan servicios a honorarios en el sector privado no están sujetos a una relación de dependencia y subordinación con el empleador, en consecuencia no es aplicable el uso de las licencias médicas en su relación laboral.

b).- Tanto en el fundamento N° 10 como en el N° 12 del proyecto de ley se refiere al uso de licencias médicas de los prestadores de servicios a honorarios en el sector público.

En efecto, en el considerando N° 10 de la iniciativa legal, a propósito del Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025 ya referido en el capítulo anterior, señala que dicho informe de la Contraloría General de la República, también comprende a prestadores de servicios a honorarios del sector público.

Por su parte, el fundamento N° 12 del proyecto de ley, se refiere específicamente a los prestadores de servicios a honorarios del sector público y a aquellos financiados con recursos públicos, señalando que el uso fraudulento de licencias médicas por parte de ellos “debe habilitar la terminación inmediata del vínculo contractual sin derecho a indemnización alguna”.

***Artículo 4º.- Quienes sean sancionados conforme a esta ley quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer cualquier cargo o función pública, sea en planta, contrata, honorarios o designación directa, en cualquiera de los órganos del Estado.***

Es importante relevar que esta norma si bien no lo señala expresamente, se entiende que afecta no solamente a quienes se desempeñan en una función pública en cualquiera de las modalidades de contratación o de designación directa, sino que también a los trabajadores del mundo privado sujetos al Código del Trabajo.

En efecto, dicha conclusión se fundamenta en base a los siguientes antecedentes:

a).- El artículo 4º propuesto por este proyecto de ley, comienza señalando textualmente que: “Quienes sean sancionados conforme a esta ley quedarán inhabilitados.....”, es decir incluye tanto a los funcionarios públicos y a los funcionarios de otros poderes del Estado tal como se analiza en el artículo 1º de este proyecto de ley, así como también a los trabajadores a honorarios del Estado e incluye a los trabajadores del mundo privado sujetos a las normas del Código del Trabajo. (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

b).- Por su parte también, en el N° 15 de los fundamentos del proyecto de ley, luego de referirse en sus considerandos anteriores a todas las clases de trabajadores, señala textualmente en su parte pertinente que: “en todos estos casos, se hace necesario establecer una sanción proporcional en función de la gravedad de la infracción y su impacto sobre el sistema de seguridad social y el correcto uso de los recursos públicos:”, para luego en su letra b) indicar la sanción que nos ocupa en esta parte correspondiente a: “La inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

En consecuencia podemos apreciar la universalidad de esta sanción en lo que se refiere a que cualquier clase de trabajador que sea sancionado por esta ley quedará inhabilitado

perpetuamente “para ejercer cualquier cargo o función pública, sea en planta, contrata, honorarios o designación directa, en cualquiera de los órganos del Estado.”

Sin el ánimo de ser reiterativo, creo pertinente reproducir en esta parte los fundamentos que señala en su N° 15 el proyecto de ley para justificar esta sanción al siguiente tenor: “Este tipo de sanción extrema es necesaria cuando se **afecta gravemente la fe pública**. La licencia médica es un instrumento de protección social, y su utilización fraudulenta por parte de quienes deben ser ejemplo de conducta cívica compromete la legitimidad del aparato estatal. **Por tanto, la inhabilitación perpetua responde a una lógica de defensa del bien común, y no meramente punitiva, reforzando estándares mínimos de integridad en el servicio público.**” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

*“Artículo 5°.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley, no libera de la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente con ocasión del período del uso irregular de la licencia médica. En caso de no efectuarse dicha restitución dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la notificación del cese de funciones, del término del contrato de trabajo o de la prestación de servicios a honorarios, el monto adeudado será imputado en la liquidación correspondiente a la declaración anual de impuestos del año tributario inmediatamente siguiente.”*

Este artículo establece expresamente la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente respecto toda clase de trabajadores.

En efecto, el artículo 5° propuesto, se refiere a los artículos 1°, 2° y 3° de la iniciativa legal, en los cuales, tal como ya lo abordamos previamente, se encuentran comprendidos los funcionarios públicos, municipales, de otros poderes del Estado, trabajadores sujetos al Código del Trabajo y aquellos que presten servicios a honorarios en el Estado.

A juicio del suscrito y dada la dificultad práctica que existe actualmente para obtener la restitución de los subsidios obtenidos indebidamente por los funcionarios, resulta una solución efectiva la propuesta de la iniciativa legal.

En efecto, con la implementación de este sistema, se iría más lejos que con las retenciones en las devoluciones de impuestos que actualmente están establecidas en nuestra legislación para ciertos casos, tales como los contribuyentes deudores de pensión alimenticia que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; Retenciones de crédito universitario solidario o con aval del Estado, Retenciones Judiciales Previsionales, etc.

Me refiero a que se iría más lejos que los casos señalados precedentemente, ya que en ellos la retención opera cuando hay devolución de impuestos para el contribuyente, en cambio, en este caso es más que una retención, tal como señala la norma propuesta **“el monto adeudado será imputado en la liquidación correspondiente a la declaración anual de impuestos del año tributario inmediatamente siguiente.”**, en consecuencia, por ejemplo si el trabajador sancionado no le corresponde devolución de impuestos, la deuda igualmente se le

costrará debiendo pagarla en el siguiente año tributario donde aparecerá reflejada la deuda en la liquidación de su declaración de impuestos anual.

***“Artículo 6º. Estarán obligados a denunciar el empleador que tomare conocimiento del delito previsto en el artículo 202 bis del Código Penal. Serán aplicables para estos efectos lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Procesal Penal.”***

En primer término es necesario señalar, que por un tema de orden del proyecto de ley, habría sido mejor que este artículo 6º fuera consignado en el artículo final de la iniciativa legal, es decir, el artículo 7º y a su vez, el artículo 7º correspondiera a este artículo 6º.

En efecto, el artículo 7º y final de este proyecto de ley, propone la incorporación de un nuevo artículo 202 bis al Código Penal, tipificando como delito la conducta respecto de quienes indebidamente hagan uso de una licencia médica obteniendo un provecho económico y es estableciendo en su inciso segundo una presunción de dicha conducta respecto las personas que en el período que cubre la licencia médica salieran “injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

Por su parte el artículo 6º del proyecto de ley, tal como veremos enseguida, establece normas relativas a la obligación de denunciar por parte del empleador este nuevo delito que propone el proyecto de ley incorporar en el Código Penal en el siguiente artículo 7º, en consecuencia, para una mejor comprensión del proyecto de ley, sin duda que habría sido mejor, invertir dichas normas.

Este artículo 6º que propone el proyecto de ley, relativo a la obligación de denuncia por parte del empleador de la comisión del nuevo delito propuesto que luego analizaremos, se suma a una serie de otras personas que tienen la obligación de denunciar de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, norma que se encuentra ubicada en su Libro Segundo “Procedimiento Ordinario”, Título I “Etapas de Investigación”, Parrafo 2º “Inicio del Procedimiento”.

Si bien no es materia de este informe analizar la norma relativa a las personas que de acuerdo al Código Procesal Penal están obligadas a denunciar, si creo necesario reproducir el citado artículo 175 del Código Procesal Penal, con el objeto de poder apreciar el contexto de la norma que propone el proyecto de ley y además por la aplicabilidad de las siguientes normas de dicho Código que señala este artículo 6º que serían aplicables al empleador que respecto el delito propuesto tendría la obligación de denunciar.

**“Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:**

a) Los miembros de **Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería**, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las **Fuerzas Armadas** estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) **Los fiscales y los demás empleados públicos**, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) **Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses** o de otros medios de locomoción o de carga, los **capitanes de naves o de aeronaves comerciales** que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los **conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga**, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) **Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia** y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito;

e) **Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales** de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, y

f) **Los jefes de establecimientos de salud, públicos o privados, y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales, públicos o privados**, respecto de los delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios de dichos establecimientos al interior de sus dependencias o mientras éstos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas. La misma obligación tendrán los **directores de los Servicios Locales de Educación** respecto de estos delitos, cuando ocurran en los establecimientos educacionales que formen parte del territorio de su competencia.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.” (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

Como podemos apreciar, existe una serie de funcionarios y personas que en razón de su cargo, profesión u oficio, tienen la obligación legal de denunciar delitos que llegaren a su conocimiento.

Este artículo 6º del proyecto de ley, si bien no propone modificar este artículo 175 del Código Procesal Penal para incorporar a los empleadores que tomaren conocimiento del delito propuesto en el artículo siguiente de la iniciativa legal, si establece dicha obligación de denuncia en el propio artículo 6º.

La segunda y última parte de este artículo 6º señala que: “Serán aplicables para estos efectos lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Procesal Penal”, es decir también para los empleadores le serán aplicables las normas que actualmente lo son para las personas que están obligadas a denunciar de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal ya reproducido anteriormente.

En primer término, en relación al artículo 176 del Código Procesal Penal, dicha norma establece el plazo que tienen las personas obligadas a denunciar para hacer la denuncia, siendo la regla general las 24 horas siguientes desde el momento que en este caso el empleador tomó conocimiento del hecho.

En efecto, el artículo 176 establece textualmente que: **“Plazo para efectuar la denuncia.** Las personas indicadas en el artículo anterior **deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.** Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República”. (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

También este artículo 6º del proyecto de ley hace aplicable el artículo 177 del Código Procesal Penal, el cual sanciona con la pena para las faltas establecida en el artículo 494 del Código Penal a la persona que obligada por el artículo 175 a denunciar omitiera hacer dicha denuncia.

Así pues, el referido artículo 177 establece textualmente lo siguiente: **“Incumplimiento de la obligación de denunciar.** Las personas indicadas en el artículo 175 **que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal,** o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.” (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

En relación a este artículo que de aprobarse el proyecto de ley sería aplicable para los empleadores que omitan hacer la denuncia por el nuevo delito propuesto por el proyecto de ley, es necesario hacer dos cometarios relevantes para un mejor entendimiento de la norma.

En primer término, en relación a la sanción, por no contener el proyecto de ley una sanción especial, sería aplicable la sanción establecida en el artículo 494 del Código Penal, norma que regula una serie de faltas ahí descritas y que corresponde a una multa de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales, lo que al presente mes de julio, equivale a una multa que parte en \$68.923 hasta \$275.692.

En segundo lugar, el inciso segundo del artículo 177 del Código Procesal Penal, establece una excusa legal absolutoria para el caso de quien está obligado a denunciar arriesgue una “persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos”, no aplicándose en consecuencia en dichos casos la pena del artículo 494 del Código Penal.

Por último, el artículo 6º propuesto por el proyecto de ley, hace aplicable el artículo 178 del Código Procesal Penal para el empleador que esta obligado a denunciar la comisión del delito tipificado en el artículo 202 bis propuesto por este proyecto de ley, determinándose de esta manera la responsabilidad y derechos del denunciante al siguiente tenor:

**“Artículo 178.- Responsabilidad y derechos del denunciante.** El denunciante no contraerá otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponderle en el caso de ser víctima del delito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio Público podrá disponer medidas de protección en favor del denunciante cuando la entidad o la naturaleza de los hechos, o la calidad de la persona denunciada, indiquen que existe un riesgo plausible de ser él o su familia víctima de hostigamientos, amenazas u otros atentados con motivo de la denuncia.”

**“Artículo 7.- Intercálase un nuevo artículo 202 bis del Código Penal, del siguiente tenor:**

***"Artículo 202 bis. Quien utilice una licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico asociado a dicha licencia, será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa equivalente al doble del monto percibido indebidamente.***

***Se presumirá comprendido la conducta descrita en el inciso anterior quien, durante el período cubierto por la licencia médica, saliere injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada."***

Previo a analizar el nuevo delito propuesto por este artículo 7º para incorporarlo en el Código Penal, es menester referirse al actual y vigente artículo 202 del referido cuerpo legal, en especial por el contenido del último inciso de dicho artículo, vigente desde el pasado 24 de mayo.

El artículo 202 del Código Penal tipificaba y sancionaba hasta antes del 24 de mayo solamente a los facultativos y a los particulares que incurrieren en alguna de las falsedades materiales o ideológicas del artículo 193 del Código Penal en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez.

A partir del 24 de mayo pasado, es decir cuatro días antes del ingreso del presente proyecto de ley al Senado de la República, a propósito de la publicación de la ley Nº 21.746, que “modifica la ley Nº 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica”, se agregó un nuevo inciso final al referido artículo 202 del Código Penal.

Dicho inciso establece textualmente que: **“Al que maliciosamente use los documentos falsos, cualquiera sea la forma en que los haya obtenido, se impondrá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la sanción aumentará en un grado”**

En consecuencia, actualmente se encuentra tipificado en el Código Penal el uso malicioso de licencias médicas falsas por parte de particulares, asignándole una pena privativa

de libertad al delito de 61 días a 3 años y una multa equivalente a la UTM del presente mes de julio que comienza en \$1.723.075 hasta los \$17.230.750.

La última parte del inciso final, establece que para el caso de reincidencia en la comisión del referido delito, la pena será aumentada en un grado, pudiendo en consecuencia llegar a la pena de presidio mayor en su grado máximo, es decir una pena privativa de libertad de hasta 5 años.

Como podemos apreciar de la comparación del tipo legal del inciso final del artículo 202 del Código Penal con el tipo legal del nuevo artículo 202 bis del Código Penal propuesto por el proyecto de ley, si bien son distintos, están intimamente relacionados.

En efecto, el inciso final del artículo 202 del Código Penal sanciona el uso malicioso de una licencia médica falsa, lo que podría estar comprendido en el tipo legal del delito propuesto en el proyecto de ley, pero éste último sanciona específicamente **el uso de una “licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico asociado a dicha licencia”**

En relación a la pena propuesta para el nuevo delito del artículo 202 bis del Código Penal, si bien en lo que se refiere a la pena privativa de libertad es la misma que la del inciso final del artículo 202 del referido Código, esto es, una pena privativa de libertad de 61 días a 3 años, se diferencia en los siguientes dos aspectos.

a).- Difiere en la multa impuesta, mientras el delito del inciso final de artículo 202 tiene asignada una multa de 25 a 250 UTM, el nuevo delito propuesto para el artículo 202 bis del Código Penal, tiene asignada una multa equivalente al doble del monto percibido indebidamente.

b).- El delito propuesto por el proyecto de ley no contiene una norma especial sobre la reincidencia del delito, a diferencia como vimos anteriormente al analizar el nuevo delito incorporado el 24 de mayo pasado en el inciso final del artículo 202 del Código Penal, que establece que para el caso de reincidencia en la comisión de este delito, la pena será aumentada en un grado, pudiendo en consecuencia llegar a la pena de presidio mayor en su grado máximo, es decir a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.

Por último, es importante abordar el inciso final de la norma propuesta, cuya redacción está claramente inspirada por el escándalo mediático relativo al uso indebido de licencias médicas ocurrido durante los años 2023 y 2024 por parte de 25.000 funcionarios públicos que durante sus respectivos períodos de reposo viajaron fuera del país, situación que fue detectada la Contraloría General de la República en su “Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica”.

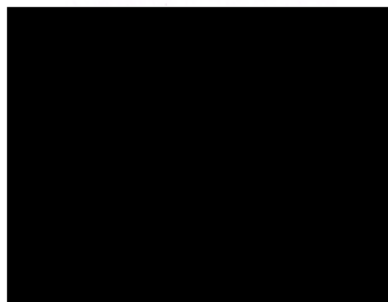
En efecto, el inciso final presume la conducta tipificada en su inciso primero, consistente en el “uso de una licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico

asociado a dicha licencia”, cuando una persona durante la licencia “saliera injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”

En relación a esta presunción que propone el proyecto de ley, es importante tener presente que se trata de una presunción legal y no de derecho, en consecuencia puede ser desvirtuada con prueba en contrario, ya que como sabemos el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, establece que la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal, rigiendo en consecuencia en nuestro país el principio de presunción de inocencia.

**Fuentes del capítulo: Proyecto de ley “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica”, boletín N° 17.563-11; Código del Trabajo; Código Procesal Penal: Ley N° 21.746, que “modifica la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica”; Código Penal.**

Es todo cuanto puedo informar, 24 de julio de 2025.



**Carlos Lobos Mosqueira**  
**Abogado**



**“Análisis proyectos de ley ingresados al Senado para regular y sancionar el mal uso de licencias médicas”.**

**I.- Introducción.**

El presente trabajo, tiene por objeto principal analizar dos proyectos de ley que han sido ingresados al Senado de la República vía moción parlamentaria a propósito del escándalo por el mal uso de licencias médicas que detectó la Contraloría General de la República en su “Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica”, que fuera dado a conocer a la opinión pública el pasado 20 de mayo y en el cual se concluye que durante los años 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país durante el período de reposo indicado en sus licencias médicas.

A propósito de dicho informe de fiscalización del ente contralor, se ingresaron dos mociones parlamentarias al Senado, las cuales básicamente tienen como finalidad endurecer las sanciones a quienes hacen mal uso de dichas licencias médicas, uno de los proyectos de ley está enfocado en las sanciones de carácter administrativas en contra de los funcionarios públicos y municipales que cometan tales abusos y el otro proyecto de ley además de abordar sanciones administrativas para trabajadores del Estado y para los trabajadores régidos por el Código del Trabajo, propone modificar al Código Penal introduciendo una nueva figura penal por el uso indebido de licencias médicas.

En efecto, con fecha 10 de junio del presente año, fue ingresado a la Cámara Alta, la moción de los Senadores señores Edwards, Gahona, Kast, Moreira y Sanhueza, titulado, “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo”, boletín N° 17.593-06.

Al día siguiente, el 11 de junio, se dio cuenta en la Sala del proyecto de ley y pasó para su estudio y discusión a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Previamente al proyecto de ley ya referido, con fecha 28 de mayo ingresó al Senado de la República la moción parlamentaria suscrita por los Senadores señora Rincón, y señores Walker, Castro González, Chahuán y Flores, titulado “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica.”, boletín N° 17.563-11.

Se dio cuenta de esta iniciativa legal en la Sala de la Cámara Alta el 3 de junio pasado, y pasó para su estudio y discusión a la Comisión de Salud del Senado.

**Fuentes del capítulo:** Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica; Proyecto de ley “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o

fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo”, boletín Nº 17.593-06; Proyecto de ley “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica”, boletín Nº 17.563-11; Página web del Senado.

## **II.- Información de contexto.**

Con el objeto de entender de mejor manera, cual fue el contexto en el cual se presentaron las dos mociones parlamentarias que serán analizadas en este informe, enseguida doy cuenta de la información que entregó la Contraloría General de la República en su página web, dando a conocer de esta manera el día 20 de mayo pasado a la opinión pública, el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica.

Bajo el título: **“CIC: Más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país durante licencias médicas”**, el ente contralor informa en su página web textualmente lo siguiente:

**“El informe de la Contraloría General de la República indica también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 permisos médicos.**

De acuerdo con el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El nuevo reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.

El informe de la CGR indica que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Otros datos del análisis de la Contraloría revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica. Sin embargo 13 servicios concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719.

Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10,0%)

### **Normativa**

La licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o

reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración.

El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otras cosas y en caso de que corresponda, el tipo de reposo para su afección (total o parcial); el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección y teléfono. Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica concedida, cuando exista un incumplimiento del reposo indicado en la licencia.

En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5.145.997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen 1.231.362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período.”

Fuentes del capítulo: Información de 20 de mayo pasado, publicada en la página web de la Contraloría General de la República, relativa al Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica.

### **III. “Análisis proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo, boletín N° 17.593-06.”**

En este capítulo analizaré el proyecto de ley indicado, el que tal como se anunciara en la introducción del presente informe, es de autoría de los Senadores Señores Rojo Edwards, Sergio Gahona, Felipe Kast, Iván Moreira y Gustavo Sanhueza.

Enseguida reproduciré el texto del proyecto de ley y paralelamente analizaré su contenido, para dichos efectos y con el objeto de poder diferenciar más fácilmente el texto del proyecto del análisis del suscrito, el proyecto se reproducirá en una letra más pequeña, en negrilla y cursiva.

*“Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Edwards, Gahona, Kast, Moreira y Sanhueza, que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud incompatible con el cargo.*

*La probidad administrativa y la continuidad del servicio público son pilares fundamentales del funcionamiento del Estado. En ese contexto, la presente iniciativa legal busca fortalecer el marco normativo aplicable a los funcionarios públicos y municipales, mediante el perfeccionamiento de las causales de destitución y de evaluación por salud incompatible con el cargo.”*

Lo primero que se debe destacar, es que este proyecto de ley propone modificaciones legales que solamente afectarían a los funcionarios públicos y municipales, proponiendo en consecuencia como analizaremos más adelante modificaciones al Estatuto Administrativo ley N° 18.834 y al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley N° 18.833.

Los ámbitos en los que se proponen las modificaciones son en relación a las sanciones administrativas para aquellos funcionarios públicos o municipales que hagan uso de certificados médicos falsos y en ambos casos también modificar las reglas respecto la salud incompatible con el cargo.

*“En los últimos años, ha quedado en evidencia una creciente preocupación ciudadana y política por el uso irregular o abusivo de licencias médicas en el sector público. De acuerdo con antecedentes oficiales, Chile ha experimentado un aumento sostenido en el número de licencias médicas, especialmente en el sector público, tanto en volumen como en duración. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en el año 2022 se emitieron más de 9 millones de licencias médicas, con una carga financiera que superó los \$1,3 billones de pesos, afectando no solo al sistema de salud, sino también a la operatividad de las instituciones.”*

En este punto es importante entregar mayores antecedentes con el fin de apreciar de mejor manera el real incremento de licencias médicas que ha experimentado el sector público en los últimos años, incluyendo los siguientes datos a las Municipalidades.

En efecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe de la Dirección de Presupuesto de diciembre de 2024, titulado “Radiografía del ausentismo laboral en el sector público”, la cantidad de licencias médicas ha evolucionado de la siguiente manera:

- **Año 2019 la cantidad de 6.150.303 licencias médicas**
- **Año 2020 la cantidad de 6.080.625 licencias médicas**
- **Año 2021 la cantidad de 8.508.008 licencias médicas**
- **Año 2022 la cantidad de 9.571.195 licencias médicas**
- **Año 2023 la cantidad de 8.401.133 licencias médicas**

Si bien dichos datos están distorsionados por los efectos de la pandemia del Covid 19, en particular los años 2021 y 2022, una comparación más real y objetiva de la evolución en la cantidad de licencias médicas es aquella que podemos hacer en los años inmediatamente anterior y posterior de la pandemia, esto implica comparar el año 2020 respecto el año 2023, donde podemos apreciar un aumento significativo de ellas, pasando desde 6.080.625 licencias médicas el año 2020 a 8.401.133 el año 2023.

Como consecuencia de lo anterior, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado considerablemente en los últimos años debido a este aumento de licencias médicas, ya que los otros factores que inciden en el ausentismo laboral se han mantenido prácticamente en los mismos índices, tales como las licencias y permisos parentales, otros permisos pagados y sin goce de remuneraciones.

En efecto, el ausentismo laboral que el año 2018 llegaba a un 25,9%, el año 2023 aumento a un 31.8%, ellos debido fundamentalmente al aumento de las licencias médicas no parentales que aumentaron en dicho período de una 15,7% a un 22,3%, experimentando en consecuencia un aumento de un 42% en esos 5 años.

A modo de antecedente, tal como se infiere de los datos entregado en el informe de la Dirección de Presupuesto, del año 2006 a la fecha casi se ha duplicado el porcentaje de ausentismo laboral, en efecto el año 2006 el ausentismo laboral era de un 17.3% y el año 2023 como ya señalamos llegó a un 31.8%.

*“Esta situación ha derivado en múltiples investigaciones por licencias falsas, adulteradas, extendidas por médicos no habilitados o utilizadas para encubrir viajes y otras actividades incompatibles con la prescripción médica. En algunos casos, se ha detectado incluso la existencia de redes organizadas para la venta de licencias fraudulentas. Ello no solo constituye una infracción a la ética profesional y administrativa, sino también una afectación directa al principio de probidad que rige a todo funcionario público.*

*Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder, es deber del legislador dotar al ordenamiento jurídico de herramientas eficaces para sancionar y prevenir estas conductas. El presente proyecto propone agregar una nueva causal específica de destitución en los estatutos del sector público y municipal, referida al uso fraudulento de licencias médicas. La redacción propuesta no solo tipifica la conducta en términos generales, sino que además detalla supuestos especialmente graves, como la falsificación documental y el abandono territorial sin autorización.*

*En segundo lugar, se introduce una modificación al artículo que regula la figura de la salud incompatible. Actualmente, dicha figura se activa solo cuando el funcionario ha hecho uso de licencias por más de seis meses en los últimos dos años. Esta regla resulta excesivamente laxa, permitiendo que funcionarios con un nivel de ausentismo significativo puedan mantener su cargo sin evaluación efectiva. Se propone reemplazar dicha fórmula por una más estricta y adecuada a los estándares de eficiencia institucional: siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año.*

*La medida no busca afectar a quienes padecen enfermedades reales o condiciones incapacitantes, sino establecer criterios objetivos para cuando una prolongada inasistencia impide razonablemente el ejercicio efectivo del cargo.*

*La modificación también entrega certidumbre a las jefaturas de servicio y a los alcaldes para actuar ante casos que, aún sin constituir fraude, evidencien una clara incompatibilidad entre el estado de salud del funcionario y las exigencias de su cargo.*

*En definitiva, este proyecto busca resguardar el buen uso de los recursos públicos, la confianza ciudadana en el aparato estatal y la continuidad de los servicios, promoviendo al mismo tiempo una cultura de responsabilidad, ética y transparencia en la función pública.*

*Por dichas consideraciones sometemos a aprobación del H. Congreso el siguiente proyecto de ley:*

**Artículo 1<sup>o</sup>.** - *Introdúcense las siguientes modificaciones en el Estatuto Administrativo, contenido en la ley N° 18.834:”*

La primera modificación propuesta que enseguida se reproduce y analiza, se refiere a introducir una nueva causal de destitución al artículo 125 del estatuto administrativo para funcionarios públicos.

Actualmente dicho artículo que se encuentra en el título V del referido Estatuto, titulado “De la responsabilidad administrativa”, establece las causales por las cuales la

autoridad correspondiente puede imponer a un funcionario la medida disciplinaria de destitución.

Las medidas disciplinarias están singularizadas en el artículo 121 del Estatuto Administrativo y son considerando de la más leve a la más grave, la Censura, la Multa, la Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y la Destitución.

Además de las causales de destitución que establecen los literales del artículo 125 del Estatuto Administrativo, el inciso segundo del referido artículo establece que dicha medida disciplinaria de destitución procederá también cuando “los hechos vulneren gravemente el principio de probidad administrativa”.

El principio de probidad lo define el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, al siguiente tenor: **“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”**

Por su parte, las causales de destitución que establece textualmente en sus literales el artículo 125 del Estatuto Administrativo son las siguientes:

- a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;
- b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84;
- c) Condena por crimen o simple delito, y
- d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.
- e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.
- f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.

***“1. Intercálase la siguiente letra f) en el artículo 125, pasando la actual letra f) a ser letra g):***

***“f) Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes. Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, entre otros, los siguientes casos:***

- i) presentar certificados falsos, adulterados o extendidos por profesionales no habilitados; o utilizar licencias médicas para encubrir el abandono injustificado del territorio nacional o desplazamientos dentro del país. Estas conductas se considerarán especialmente agravadas ante el incumplimiento, retardo o entorpecimiento de los procesos de fiscalización dispuestos por la autoridad para verificar el cumplimiento efectivo del reposo prescrito:***
- ii) emitir boletas o facturas por servicios correspondientes a actividades realizadas durante el período cubierto por el reposo médico, o desempeñarse laboralmente para otro empleador o por cuenta propia***

*en dicho período;*

*iii) participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, o en cualquier otra actividad que sean incompatibles con el reposo o modalidad prescrita por la licencia; o en actividades de campañas políticas, partidarias o gremiales durante el período de reposo;*

*iv) incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.*

Como podemos apreciar, el proyecto de ley propone incorporar esta nueva causal de destitución en la letra f) del artículo 125 del Estatuto Administrativo

La particularidad de esta nueva casual de destitución que propone la iniciativa legal, dice relación con que luego de describir la causal consistente en “Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes”, plantea en cuatro numerales una serie de hipótesis en las cuales se configura dicha causal, sin que ellas sean de carácter taxativas.

En efecto, luego de describir la nueva causal el proyecto de ley en el encabezado de la letra f) continúa señalando que: “Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, entre otros, los siguientes casos:” (Lo destacado en negrilla es del suscrito)

Al señalar la frase “entre otros”, claramente el proyecto de ley deja abierta la posibilidad que existan otros casos o hipótesis en las cuales se incurra en la nueva causal de destitución propuesta, además de las que expresamente plantea la norma.

Previo al análisis de las hipótesis que describe la nueva letra f) propuesta para el artículo 125 del Estatuto Administrativo, es importante hacer presente, que los casos que plantean los cuatro numerales de la nueva causal que se propone, en su gran mayoría no dicen relación con la causal propiamente tal.

En efecto, la causal se refiere a “utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes” y solamente en la primera parte del numeral (i) hace referencia a dicha conducta al señalar que: “Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes.”

En todos los demás casos que plantea tanto dicho numeral como los numerales (ii), (iii) y (iv), se refiere a conductas que dicen relación con la vulneración del reposo indicado en la licencia médica, pero no necesariamente con la falsedad de ella.

En consecuencia, el proyecto de ley en esta parte, no solamente propone introducir una nueva causal de destitución referida a la utilización de certificado médicos falsos, sino que, dicha causal también propone aplicarla a quienes no cumplan con el reposo médico, efectuando viajes dentro o fuera del territorio nacional; realizar actividades laborales por cuenta propia o como dependiente; participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, gremiales o políticas y por último establece de manera más genérica consistente

en “incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.

***“2. Reemplázase el inciso primero del artículo 151 por el siguiente:***

***“El Jefe superior del servicio podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Jefe superior del servicio deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.”.***

Esta modificación tal como lo señala textualmente el proyecto de ley en sus fundamentos se debe a que **“Actualmente, dicha figura se activa solo cuando el funcionario ha hecho uso de licencias por más de seis meses en los últimos dos años. Esta regla resulta excesivamente laxa, permitiendo que funcionarios con un nivel de ausentismo significativo puedan mantener su cargo sin evaluación efectiva. Se propone reemplazar dicha fórmula por una más estricta y adecuada a los estándares de eficiencia institucional: siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año.”**

En efecto, el actual y vigente artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual se encuentra ubicado en el título VI de dicho cuerpo legal, denominado “De la cesación de funciones”, establece textualmente que: **“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.**

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito y corresponde al inciso que se propone modificar, los otros dos incisos reproducidos se mantendrían).

Como se puede apreciar de la comparación de la norma actualmente vigente en esta materia con la norma propuesta, sin duda que la norma propuesta al señalar que se configura la causal de salud incompatible con siete meses de licencias acumuladas o seis meses continuos dentro de un año, permitiría al jefe de Servicio declarar la salud incompatible de un funcionario con un mayor grado de flexibilidad.

***“2. Agrégase al artículo 151 el siguiente inciso final:***

***“El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como una falta administrativa grave.”.***



Esta propuesta de modificación, si bien no está explicada en los fundamentos del proyecto de ley y tampoco es clara la redacción de este inciso final propuesto, se entiende en el sentido de hacer exigible al Jefe Superior de Servicio que si los nuevos plazos de la licencia médica que propone la norma se extienden por un mes adicional **deberá** requerir la evaluación del COMPIN, es decir, el decir el Jefe de Servicio si no inicia el proceso para declarar la salud incompatible del funcionario, dicha omisión será considerada como una falta administrativa grave.

En efecto, la norma actualmente está redactada como una facultad del Jefe de Servicio en esta materia, al señalar en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo que “**podrá** considerar como salud incompatible” o en el inciso final al indicar que “El jefe superior del servicio, para ejercer la **facultad** señalada en el inciso primero”.

En definitiva y para una mejor comprensión, enseguida paso a reproducir como quedaría redactado el artículo 151 del Estatuto administrativo si fuera aprobado en los mismos términos el proyecto de ley en estudio, destacando en negrilla la parte reemplazada (inciso primero) y en negrilla y subrayado la parte nueva de la norma (inciso final).

**“El Jefe superior del servicio podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Jefe superior del servicio deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.**

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

**El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como una falta administrativa grave.”**

***“Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Estatuto de los Funcionarios Municipales, contenido en la ley N° 18.883:”***

Enseguida el proyecto de ley, propone básicamente las mismas modificaciones al Estatuto Administrativo que hemos analizado previamente, para el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, contenido en la ley N° 18.883, obviamente con las adecuaciones pertinentes en virtud de las particularidades distintas de las instituciones a las cuales se aplica cada uno de los estatutos.

Es así como por ejemplo, cuando se propone regular la salud incompatible, en lugar de referirse al Jefe Superior del Servicio se refiere al Alcalde, o bien, en este mismo tema, a propósito de la sanción por no iniciar el proceso de Salud Incompatible, para el Alcalde, será considerado notable abandono de deberes cuando este incumplimiento sea de manera reiterada, en cambio como vimos en el Estatuto Administrativo, para el jefe Superior del Servicio no requiere ser de manera reiterada y es considerada una falta grave.

En consideración de lo anterior y con el objeto de no ser redundante, se dan por reproducidas las explicaciones de las normas propuestas anteriormente para las siguientes normas que se reproducen propuestas por el proyecto de ley para modificar el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley N° 18.883.

***“1. Intercálase la siguiente letra g) en el artículo 123, pasando la actual letra g) a ser letra h):***

***“g) Utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes. Se entenderá, en particular, como uso fraudulento o malicioso de certificaciones médicas, entre otros, los siguientes casos:***

***i) presentar certificados falsos, adulterados o extendidos por profesionales no habilitados; o utilizar licencias médicas para encubrir el abandono injustificado del territorio nacional o desplazamientos dentro del país. Estas conductas se considerarán especialmente agravadas ante el incumplimiento, retardo o entorpecimiento de los procesos de fiscalización dispuestos por la autoridad para verificar el cumplimiento efectivo del reposo prescrito;***

***ii) emitir boletas o facturas por servicios correspondientes a actividades realizadas durante el período cubierto por el reposo médico, o desempeñarse laboralmente para otro empleador o por cuenta propia en dicho período;***

***iii) participar en actividades públicas, sociales, recreativas, deportivas, o en cualquier otra actividad que sean incompatibles con el reposo o modalidad prescrita por la licencia; o en actividades de campañas políticas, partidarias o gremiales durante el período de reposo;***

***iv) incumplir, sin causa justificada, el reposo, sus plazos o la modalidad prescrita por el profesional tratante; o ausentarse injustificadamente de controles o de la realización de exámenes dispuestos por la autoridad médica competente o prestadores de salud.”.***

***2. Reemplázase el inciso primero del artículo 148 por el siguiente:***

***“El Alcalde podrá considerar como causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a siete meses, o por un período continuo igual o superior a seis meses, dentro del período de un año. En todo caso, el Alcalde deberá proceder conforme a lo establecido en el inciso tercero, si los plazos señalados se extendieron por un mes adicional.”.***

***3. Agrégase al artículo 148 el siguiente inciso final:***

***“El incumplimiento reiterado de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo será considerado como un notable abandono de deberes”.”***

Fuentes del capítulo: Proyecto de ley “Que modifica diversos cuerpos legales, en materia de sanciones aplicables a los funcionarios públicos que hagan uso de certificaciones médicas falsas o fraudulentas, y de la regulación de salud

incompatible con el cargo”, boletín Nº 17.593-06; Informe de la Dirección de Presupuesto de diciembre de 2024, titulado “Radiografía del ausentismo laboral en el sector público; Estatuto Administrativo, ley Nº 18.884; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales, ley Nº 18.883.

#### **IV. “Análisis proyecto de ley que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica, boletín Nº 17.563-11.”**

En este capítulo analizaré el proyecto de ley indicado, el que tal como se anunciara en la introducción del presente informe, es de autoría de la Senadora señora Ximena Rincón y de los Senadores señores Matías Walker, Juan Luis Castro, Francisco Chahuán e Iván Flores.

Enseguida reproduciré el texto del proyecto de ley y paralelamente analizaré su contenido, para dichos efectos y con el objeto de poder diferenciar más fácilmente el texto del proyecto del análisis del suscrito, al igual que la iniciativa legal analizada en el capítulo anterior, el proyecto de ley se reproducirá en una letra más pequeña, en negrilla y cursiva.

*“Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Rincón, y señores Walker, Castro González, Chahuán y Flores, que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica.*

*Considerando,*

- 1. Que, según lo informado por la Contraloría General de la República en su Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025, durante el período 2023- 2024 se detectaron 25.078 funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos que habrían hecho uso de licencias médicas mientras viajaban fuera del país, vulnerando la finalidad de las mismas, cuyo propósito es permitir la recuperación del trabajador ante una condición de salud que le impide desempeñar sus funciones. Configurando así un uso irregular de 35.585 licencias médicas y registrando 59.575 movimientos migratorios durante dichos períodos de licencia.*
- 2. Que la normativa vigente, en particular lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), establece que las licencias médicas sólo pueden ser validadas si el reposo prescrito se cumple, y que su incumplimiento, especialmente con salidas del país, puede dar lugar al rechazo de la licencia, la pérdida del subsidio y eventuales responsabilidades administrativas y penales.*
- 3. Que la propia Contraloría, en cumplimiento del artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo y del Código Procesal Penal, remitió todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, instruyendo además a más de 700 entidades públicas la apertura inmediata de sumarios administrativos para investigar las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.*
- 4. Que el uso fraudulento de licencias médicas, en muchos casos con evidencia pública de viajes de placer e incluso participación en actividades comerciales o electorales durante los períodos de supuesta incapacidad laboral, constituye no sólo una falta administrativa grave, sino también una afectación directa al erario público y al principio de probidad que rige la función pública.*
- 5. Que este tipo de prácticas ha alcanzado una dimensión estructural, al punto que la propia Contralora General de la República advirtió ante el Congreso Nacional que existían redes informales que promovían abiertamente la venta de licencias médicas falsas a través de redes sociales y grupos de mensajería, lo que refuerza la necesidad de respuestas legislativas eficaces que restauren la confianza*

*pública en el sistema.*

6. *Que, en paralelo, el Ministerio de Hacienda informó que 131 instituciones públicas han iniciado sumarios administrativos, en respuesta al escándalo, y creó una Comisión de Ausentismo Laboral en el Estado, lo que evidencia la magnitud y transversalidad del fenómeno.*

7. *De esta manera, la gravedad del caso no radica únicamente en el volumen de estos casos y su costo para el erario público, sino también en el hecho de que afecta directamente la eficiencia del Estado: funcionarios ausentes injustificadamente debilitan la capacidad del aparato público para cumplir su rol, y perjudican a sus equipos y a la ciudadanía.*

8. *Que, dada la obligación del Estado de proteger los recursos públicos y sancionar su uso indebido, resulta indispensable establecer mecanismos legales eficaces para garantizar la restitución de los montos indebidamente percibidos por quienes, amparándose en una licencia médica, vulneraron las condiciones que habilitan el goce del subsidio o remuneración correspondiente.*

9. *Que, la gravedad del falseamiento de antecedentes médicos con el objeto de obtener licencias indebidas, y el aprovechamiento de subsidios públicos sin causal legítima, constituye un atentado directo contra la ética del servicio público y el principio de legalidad que rige a quienes desempeñan funciones financiadas por el Estado.*

10. *Que, la Contraloría General de la República ha establecido que las conductas descritas en su Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025 no se limitan exclusivamente a funcionarios públicos de planta o contrata, sino que abarcan también a trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos, y a prestadores de servicios a honorarios en el sector público, todos los cuales se encuentran sujetos a estándares mínimos de probidad y responsabilidad en el uso de recursos fiscales.*

11. *Que el Código del Trabajo, en sus disposiciones sobre justificación de ausencias y uso de licencias médicas, establece que el descanso debe corresponder efectivamente a una incapacidad laboral temporal, y que el incumplimiento del reposo médico constituye una causal objetiva de término del contrato de trabajo.*

12. *Que, de igual forma, los prestadores de servicios a honorarios bajo la Ley N° 18.834 o cualquier normativa especial, y cuyas funciones estén financiadas con recursos públicos, tienen el deber de ajustarse a los principios de responsabilidad y buena fe contractual, por lo que el uso fraudulento de licencias médicas debe habilitar la terminación inmediata del vínculo contractual sin derecho a indemnización alguna.*

13. *Que, en todos estos casos, se hace necesario establecer una sanción proporcional en función de la gravedad de la infracción y su impacto sobre el sistema de seguridad social y el correcto uso de los recursos públicos:*

a) *La desvinculación inmediata del trabajador cuando se acredite el uso doloso o fraudulento de licencias médicas.*

*Esta medida se justifica en razón del principio de buena fe que rige las relaciones laborales, y del deber de veracidad que impone al trabajador no simular una incapacidad laboral. La utilización dolosa de un instrumento médico para obtener beneficios indebidos configura un incumplimiento grave de las*

*obligaciones contractuales, ya sea en el ámbito público o privado, por lo que la desvinculación debe operar como sanción inmediata, sin perjuicio de otras acciones legales.*

**b) La inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.**

*Este tipo de sanción extrema es necesaria cuando se afecta gravemente la fe pública. La licencia médica es un instrumento de protección social, y su utilización fraudulenta por parte de quienes deben ser ejemplo de conducta cívica compromete la legitimidad del aparato estatal. Por tanto, la inhabilitación perpetua responde a una lógica de defensa del bien común, y no meramente punitiva, reforzando estándares mínimos de integridad en el servicio público.*

**c) La restitución obligatoria de los montos percibidos indebidamente, ya sea como subsidio por incapacidad laboral, honorarios o remuneraciones ordinarias.**

*La devolución de estos recursos es coherente con el principio de responsabilidad en la gestión pública y privada. Toda persona que haya recibido pagos por un supuesto estado de incapacidad no verificado o simulado, debe devolver dichos fondos al sistema que fueron indebidamente cargados, a fin de proteger la sustentabilidad financiera de la seguridad social y del Estado.*

**14. Que estas medidas no solo buscan sancionar el uso indebido de recursos públicos, sino también prevenir nuevas prácticas de fraude laboral, reforzando los mecanismos de control y fiscalización, tanto en el sector público como en el privado cuando exista financiamiento estatal.**

*En virtud de los considerandos anteriormente enunciados, y en especial, para evitar nuevos fraudes, debe incorporarse un procedimiento de restitución ex post a través del sistema tributario, usando mecanismos existentes, sin incurrir en gasto fiscal ni crear nuevas figuras tributarias. Todo ello, en el marco del principio de responsabilidad fiscal, el respeto a la legalidad vigente y conforme a las facultades constitucionales que nos asisten, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley.*

#### **PROYECTO DE LEY**

**Artículo 1º.-** Los funcionarios públicos y trabajadores de entidades que integran la Administración del Estado, incluyendo ministerios, subsecretarías, gobiernos regionales, municipalidades, servicios públicos centralizados y descentralizados, universidades estatales, empresas públicas y cualquier otro órgano, entidad o institución que administre, reciba o ejecute recursos públicos, así como del Congreso Nacional y Poder Judicial, que hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, incurrirán en una vulneración grave de los principios de probidad, legalidad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función pública.

*Dicha infracción será considerada causal suficiente para la cesación inmediata de sus funciones, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan, conforme a la normativa vigente.”*

Este primer artículo del proyecto de ley, con una técnica legislativa distinta que la iniciativa legal analizada en el capítulo anterior y con una mayor amplitud de trabajadores sujetos a una eventual sanción, impone el cese inmediato de sus funciones a quienes “hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades

manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

En efecto, en el capítulo anterior, analizamos la norma propuesta que propone tanto para los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos como para el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la incorporación de una nueva causal de la medida disciplinaria de destitución.

En este artículo 1º del proyecto de ley en cambio, no solamente abarca a funcionarios sujetos a dichos estatutos, sino que además incorpora a funcionarios y trabajadores de “cualquier otro órgano, entidad o institución que administre, reciba o ejecute recursos públicos, así como del Congreso Nacional y Poder Judicial”, los cuales no necesariamente están sujetos a las normas del estatuto administrativo.

En efecto, los trabajadores del Congreso Nacional están sujetos a sus reglamentos propios para la gestión de su personal y en el caso del Poder Judicial sus trabajadores están sujetos a las normas pertinentes del Código Orgánico de Tribunales, a los Autoacordados de la Excm. Corte Suprema y al Reglamento del personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Otra diferencia, en relación a la causal que establece el proyecto analizado en el capítulo anterior, se refiere a que dicho proyecto además de sancionar la conducta relativa a utilizar certificaciones médicas falsas o fraudulentas para justificar ausencias o incumplimientos de deberes, sanciona además una serie de conductas que dicen relación con la vulneración del reposo indicado en la licencia médica y no necesariamente con la falsedad de dichas licencias.

En cambio este proyecto de ley no se refiere expresamente a sancionar a quienes utilicen licencias médicas falsas o fraudulentas, sino que a su uso irregular, coincidiendo en ello con el proyecto analizado en el capítulo anterior, pero en este proyecto redactado de una manera más genérica al señalar textualmente en su parte pertinente “mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

Por último y tal como se esbozó previamente, este proyecto de ley a diferencia del analizado anteriormente que propone incluir la infracción como nueva causal de destitución en ambos estatutos administrativos, sanciona la infracción con la cesación inmediata de sus funciones, lo que se entiende en virtud que su ámbito de aplicación va más allá que los trabajadores regidos por los estatutos administrativos indicados.

***Artículo 2º.- Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que hicieren uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, incurrirán en una infracción grave a las obligaciones que impone la relación laboral.***

*Dicha conducta será considerada causal suficiente para la terminación del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales, civiles o penales que puedan derivarse, así como de la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente.*

Este artículo propuesto, describe de manera idéntica la conducta que analizamos en el artículo 1º de esta iniciativa legal, pero ahora en relación a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que son la gran parte de los trabajadores del país que se desempeñan mayoritariamente en la empresa privada.

Ahora bien, en relación a la calificación que hace el proyecto de ley de la infracción, el inciso primero del artículo propuesto señala que dicha conducta constituye una **“infracción grave a las obligaciones que impone la relación laboral”**, en cambio en el artículo anterior propuesto, la infracción la califica como **“una vulneración grave de los principios de probidad, legalidad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función pública.”**

En lo que se refiere a la sanción que propone el proyecto de ley, la consecuencia como veremos enseguida es la misma que la establecida en el artículo anterior del proyecto de ley y consiste básicamente en poder poner término a la relación laboral con el trabajador.

En efecto, la norma propuesta señala que “dicha conducta será considerada causal suficiente para la terminación del contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo”.

El artículo 160 del Código del Trabajo establece una serie de causales mediante las cuales el empleador puede poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización para el trabajador, dichas casuales son conocidas en la doctrina como casuales disciplinarias o causales de autodespido por incumplimiento grave del trabajador.

Como veremos las conductas de los trabajadores que establece el artículo son particularmente graves y es precisamente a ese tipo de conductas que el proyecto de ley asocia la infracción de hacer uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada.

En efecto, el artículo 160 del Código del Trabajo, establece textualmente lo siguiente: **“El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:**

- 1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:
  - a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
  - b) Conductas de acoso sexual;
  - c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa;

- d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;
  - e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
  - f) Conductas de acoso laboral.
- 2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
- 3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
- 4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
- a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
  - b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.
- 5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
- 6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

**7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”** (Lo destacado en negrilla es del suscrito)

El proyecto de ley, sin necesidad de modificar el Código del Trabajo, propone establecer que la infracción consistente en hacer uso irregular de licencias médicas, mediante salidas del país u otras actividades manifiestamente incompatibles con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada, sea considerada suficiente para terminar la relación laboral por constituir dicha conducta la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo consistente en el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

Por último, la norma propuesta señala expresamente la obligación del trabajador de restituir subsidios percibidos indebidamente, obligación que no se encuentra establecida expresamente en el Código del Trabajo.

***Artículo 3º.- Los trabajadores regidos por regímenes especiales, incluidos quienes prestan servicios a honorarios, estarán sujetos a iguales sanciones en caso de verificarse el uso irregular de licencias médicas, incluyendo la terminación inmediata del vínculo contractual vigente.***

Si bien no lo señala expresamente el artículo, se puede presumir que esta norma se refiere a los trabajadores que prestan servicios a honorarios en el sector público y no en el sector privado por las siguientes razones.



a).- Los trabajadores que prestan servicios a honorarios en el sector privado no están sujetos a una relación de dependencia y subordinación con el empleador, en consecuencia no es aplicable el uso de las licencias médicas en su relación laboral.

b).- Tanto en el fundamento N° 10 como en el N° 12 del proyecto de ley se refiere al uso de licencias médicas de los prestadores de servicios a honorarios en el sector público.

En efecto, en el considerando N° 10 de la iniciativa legal, a propósito del Informe Consolidado de Información Circularizada N° 9 de 2025 ya referido en el capítulo anterior, señala que dicho informe de la Contraloría General de la República, también comprende a prestadores de servicios a honorarios del sector público.

Por su parte, el fundamento N° 12 del proyecto de ley, se refiere específicamente a los prestadores de servicios a honorarios del sector público y a aquellos financiados con recursos públicos, señalando que el uso fraudulento de licencias médicas por parte de ellos “debe habilitar la terminación inmediata del vínculo contractual sin derecho a indemnización alguna”.

***Artículo 4º.- Quienes sean sancionados conforme a esta ley quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer cualquier cargo o función pública, sea en planta, contrata, honorarios o designación directa, en cualquiera de los órganos del Estado.***

Es importante relevar que esta norma si bien no lo señala expresamente, se entiende que afecta no solamente a quienes se desempeñan en una función pública en cualquiera de las modalidades de contratación o de designación directa, sino que también a los trabajadores del mundo privado sujetos al Código del Trabajo.

En efecto, dicha conclusión se fundamenta en base a los siguientes antecedentes:

a).- El artículo 4º propuesto por este proyecto de ley, comienza señalando textualmente que: “Quienes sean sancionados conforme a esta ley quedarán inhabilitados.....”, es decir incluye tanto a los funcionarios públicos y a los funcionarios de otros poderes del Estado tal como se analiza en el artículo 1º de este proyecto de ley, así como también a los trabajadores a honorarios del Estado e incluye a los trabajadores del mundo privado sujetos a las normas del Código del Trabajo. (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

b).- Por su parte también, en el N° 15 de los fundamentos del proyecto de ley, luego de referirse en sus considerandos anteriores a todas las clases de trabajadores, señala textualmente en su parte pertinente que: “en todos estos casos, se hace necesario establecer una sanción proporcional en función de la gravedad de la infracción y su impacto sobre el sistema de seguridad social y el correcto uso de los recursos públicos:”, para luego en su letra b) indicar la sanción que nos ocupa en esta parte correspondiente a: “La inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

En consecuencia podemos apreciar la universalidad de esta sanción en lo que se refiere a que cualquier clase de trabajador que sea sancionado por esta ley quedará inhabilitado

perpetuamente “para ejercer cualquier cargo o función pública, sea en planta, contrata, honorarios o designación directa, en cualquiera de los órganos del Estado.”

Sin el ánimo de ser reiterativo, creo pertinente reproducir en esta parte los fundamentos que señala en su N° 15 el proyecto de ley para justificar esta sanción al siguiente tenor: “Este tipo de sanción extrema es necesaria cuando se **afecta gravemente la fe pública**. La licencia médica es un instrumento de protección social, y su utilización fraudulenta por parte de quienes deben ser ejemplo de conducta cívica compromete la legitimidad del aparato estatal. **Por tanto, la inhabilitación perpetua responde a una lógica de defensa del bien común, y no meramente punitiva, reforzando estándares mínimos de integridad en el servicio público.**” (Lo destacado en negrilla y subrayado es del suscrito).

*“Artículo 5°.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley, no libera de la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente con ocasión del período del uso irregular de la licencia médica. En caso de no efectuarse dicha restitución dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la notificación del cese de funciones, del término del contrato de trabajo o de la prestación de servicios a honorarios, el monto adeudado será imputado en la liquidación correspondiente a la declaración anual de impuestos del año tributario inmediatamente siguiente.”*

Este artículo establece expresamente la obligación de restitución de los subsidios percibidos indebidamente respecto toda clase de trabajadores.

En efecto, el artículo 5° propuesto, se refiere a los artículos 1°, 2° y 3° de la iniciativa legal, en los cuales, tal como ya lo abordamos previamente, se encuentran comprendidos los funcionarios públicos, municipales, de otros poderes del Estado, trabajadores sujetos al Código del Trabajo y aquellos que presten servicios a honorarios en el Estado.

A juicio del suscrito y dada la dificultad práctica que existe actualmente para obtener la restitución de los subsidios obtenidos indebidamente por los funcionarios, resulta una solución efectiva la propuesta de la iniciativa legal.

En efecto, con la implementación de este sistema, se iría más lejos que con las retenciones en las devoluciones de impuestos que actualmente están establecidas en nuestra legislación para ciertos casos, tales como los contribuyentes deudores de pensión alimenticia que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; Retenciones de crédito universitario solidario o con aval del Estado, Retenciones Judiciales Previsionales, etc.

Me refiero a que se iría más lejos que los casos señalados precedentemente, ya que en ellos la retención opera cuando hay devolución de impuestos para el contribuyente, en cambio, en este caso es más que una retención, tal como señala la norma propuesta **“el monto adeudado será imputado en la liquidación correspondiente a la declaración anual de impuestos del año tributario inmediatamente siguiente.”**, en consecuencia, por ejemplo si el trabajador sancionado no le corresponde devolución de impuestos, la deuda igualmente se le

cobrará debiendo pagarla en el siguiente año tributario donde aparecerá reflejada la deuda en la liquidación de su declaración de impuestos anual.

***“Artículo 6º. Estarán obligados a denunciar el empleador que tomare conocimiento del delito previsto en el artículo 202 bis del Código Penal. Serán aplicables para estos efectos lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Procesal Penal.”***

En primer término es necesario señalar, que por un tema de orden del proyecto de ley, habría sido mejor que este artículo 6º fuera consignado en el artículo final de la iniciativa legal, es decir, el artículo 7º y a su vez, el artículo 7º correspondiera a este artículo 6º.

En efecto, el artículo 7º y final de este proyecto de ley, propone la incorporación de un nuevo artículo 202 bis al Código Penal, tipificando como delito la conducta respecto de quienes indebidamente hagan uso de una licencia médica obteniendo un provecho económico y es estableciendo en su inciso segundo una presunción de dicha conducta respecto las personas que en el período que cubre la licencia médica salieran “injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”.

Por su parte el artículo 6º del proyecto de ley, tal como veremos enseguida, establece normas relativas a la obligación de denunciar por parte del empleador este nuevo delito que propone el proyecto de ley incorporar en el Código Penal en el siguiente artículo 7º, en consecuencia, para una mejor comprensión del proyecto de ley, sin duda que habría sido mejor, invertir dichas normas.

Este artículo 6º que propone el proyecto de ley, relativo a la obligación de denuncia por parte del empleador de la comisión del nuevo delito propuesto que luego analizaremos, se suma a una serie de otras personas que tienen la obligación de denunciar de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, norma que se encuentra ubicada en su Libro Segundo “Procedimiento Ordinario”, Título I “Etapas de Investigación”, Parágrafo 2º “Inicio del Procedimiento”.

Si bien no es materia de este informe analizar la norma relativa a las personas que de acuerdo al Código Procesal Penal están obligadas a denunciar, si creo necesario reproducir el citado artículo 175 del Código Procesal Penal, con el objeto de poder apreciar el contexto de la norma que propone el proyecto de ley y además por la aplicabilidad de las siguientes normas de dicho Código que señala este artículo 6º que serían aplicables al empleador que respecto el delito propuesto tendría la obligación de denunciar.

**“Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:**

a) Los miembros de **Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería**, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las **Fuerzas Armadas** estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) **Los fiscales y los demás empleados públicos**, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) **Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses** o de otros medios de locomoción o de carga, los **capitanes de naves o de aeronaves comerciales** que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los **conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga**, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) **Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia** y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito;

e) **Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales** de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, y

f) **Los jefes de establecimientos de salud, públicos o privados, y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales, públicos o privados**, respecto de los delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios de dichos establecimientos al interior de sus dependencias o mientras éstos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas. La misma obligación tendrán los **directores de los Servicios Locales de Educación** respecto de estos delitos, cuando ocurran en los establecimientos educacionales que formen parte del territorio de su competencia.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.” (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

Como podemos apreciar, existe una serie de funcionarios y personas que en razón de su cargo, profesión u oficio, tienen la obligación legal de denunciar delitos que llegaren a su conocimiento.

Este artículo 6º del proyecto de ley, si bien no propone modificar este artículo 175 del Código Procesal Penal para incorporar a los empleadores que tomaren conocimiento del delito propuesto en el artículo siguiente de la iniciativa legal, si establece dicha obligación de denuncia en el propio artículo 6º.

La segunda y última parte de este artículo 6º señala que: “Serán aplicables para estos efectos lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Procesal Penal”, es decir también para los empleadores le serán aplicables las normas que actualmente lo son para las personas que están obligadas a denunciar de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal ya reproducido anteriormente.

En primer término, en relación al artículo 176 del Código Procesal Penal, dicha norma establece el plazo que tienen las personas obligadas a denunciar para hacer la denuncia, siendo la regla general las 24 horas siguientes desde el momento que en este caso el empleador tomó conocimiento del hecho.

En efecto, el artículo 176 establece textualmente que: **“Plazo para efectuar la denuncia.** Las personas indicadas en el artículo anterior **deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.** Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República”. (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

También este artículo 6º del proyecto de ley hace aplicable el artículo 177 del Código Procesal Penal, el cual sanciona con la pena para las faltas establecida en el artículo 494 del Código Penal a la persona que obligada por el artículo 175 a denunciar omitiera hacer dicha denuncia.

Así pues, el referido artículo 177 establece textualmente lo siguiente: **“Incumplimiento de la obligación de denunciar.** Las personas indicadas en el artículo 175 **que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal,** o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.” (Lo destacado en negrilla es del suscrito).

En relación a este artículo que de aprobarse el proyecto de ley sería aplicable para los empleadores que omitan hacer la denuncia por el nuevo delito propuesto por el proyecto de ley, es necesario hacer dos cometarios relevantes para un mejor entendimiento de la norma.

En primer término, en relación a la sanción, por no contener el proyecto de ley una sanción especial, sería aplicable la sanción establecida en el artículo 494 del Código Penal, norma que regula una serie de faltas ahí descritas y que corresponde a una multa de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales, lo que al presente mes de julio, equivale a una multa que parte en \$68.923 hasta \$275.692.

En segundo lugar, el inciso segundo del artículo 177 del Código Procesal Penal, establece una excusa legal absolutoria para el caso de quien está obligado a denunciar arriesgue una “persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos”, no aplicándose en consecuencia en dichos casos la pena del artículo 494 del Código Penal.

Por último, el artículo 6º propuesto por el proyecto de ley, hace aplicable el artículo 178 del Código Procesal Penal para el empleador que esta obligado a denunciar la comisión del delito tipificado en el artículo 202 bis propuesto por este proyecto de ley, determinándose de esta manera la responsabilidad y derechos del denunciante al siguiente tenor:

**“Artículo 178.- Responsabilidad y derechos del denunciante.** El denunciante no contraerá otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponderle en el caso de ser víctima del delito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio Público podrá disponer medidas de protección en favor del denunciante cuando la entidad o la naturaleza de los hechos, o la calidad de la persona denunciada, indiquen que existe un riesgo plausible de ser él o su familia víctima de hostigamientos, amenazas u otros atentados con motivo de la denuncia.”

**“Artículo 7.- Intercálase un nuevo artículo 202 bis del Código Penal, del siguiente tenor:**

***"Artículo 202 bis. Quien utilice una licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico asociado a dicha licencia, será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa equivalente al doble del monto percibido indebidamente.***

***Se presumirá comprendido la conducta descrita en el inciso anterior quien, durante el período cubierto por la licencia médica, saliere injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada."***

Previo a analizar el nuevo delito propuesto por este artículo 7º para incorporarlo en el Código Penal, es menester referirse al actual y vigente artículo 202 del referido cuerpo legal, en especial por el contenido del último inciso de dicho artículo, vigente desde el pasado 24 de mayo.

El artículo 202 del Código Penal tipificaba y sancionaba hasta antes del 24 de mayo solamente a los facultativos y a los particulares que incurrieren en alguna de las falsedades materiales o ideológicas del artículo 193 del Código Penal en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez.

A partir del 24 de mayo pasado, es decir cuatro días antes del ingreso del presente proyecto de ley al Senado de la República, a propósito de la publicación de la ley Nº 21.746, que “modifica la ley Nº 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica”, se agregó un nuevo inciso final al referido artículo 202 del Código Penal.

Dicho inciso establece textualmente que: **“Al que maliciosamente use los documentos falsos, cualquiera sea la forma en que los haya obtenido, se impondrá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la sanción aumentará en un grado”**

En consecuencia, actualmente se encuentra tipificado en el Código Penal el uso malicioso de licencias médicas falsas por parte de particulares, asignándole una pena privativa

de libertad al delito de 61 días a 3 años y una multa equivalente a la UTM del presente mes de julio que comienza en \$1.723.075 hasta los \$17.230.750.

La última parte del inciso final, establece que para el caso de reincidencia en la comisión del referido delito, la pena será aumentada en un grado, pudiendo en consecuencia llegar a la pena de presidio mayor en su grado máximo, es decir una pena privativa de libertad de hasta 5 años.

Como podemos apreciar de la comparación del tipo legal del inciso final del artículo 202 del Código Penal con el tipo legal del nuevo artículo 202 bis del Código Penal propuesto por el proyecto de ley, si bien son distintos, están intimamente relacionados.

En efecto, el inciso final del artículo 202 del Código Penal sanciona el uso malicioso de una licencia médica falsa, lo que podría estar comprendido en el tipo legal del delito propuesto en el proyecto de ley, pero éste último sanciona específicamente **el uso de una “licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico asociado a dicha licencia”**

En relación a la pena propuesta para el nuevo delito del artículo 202 bis del Código Penal, si bien en lo que se refiere a la pena privativa de libertad es la misma que la del inciso final del artículo 202 del referido Código, esto es, una pena privativa de libertad de 61 días a 3 años, se diferencia en los siguientes dos aspectos.

a).- Difiere en la multa impuesta, mientras el delito del inciso final de artículo 202 tiene asignada una multa de 25 a 250 UTM, el nuevo delito propuesto para el artículo 202 bis del Código Penal, tiene asignada una multa equivalente al doble del monto percibido indebidamente.

b).- El delito propuesto por el proyecto de ley no contiene una norma especial sobre la reincidencia del delito, a diferencia como vimos anteriormente al analizar el nuevo delito incorporado el 24 de mayo pasado en el inciso final del artículo 202 del Código Penal, que establece que para el caso de reincidencia en la comisión de este delito, la pena será aumentada en un grado, pudiendo en consecuencia llegar a la pena de presidio mayor en su grado máximo, es decir a una pena privativa de libertad de hasta 5 años.

Por último, es importante abordar el inciso final de la norma propuesta, cuya redacción está claramente inspirada por el escándalo mediático relativo al uso indebido de licencias médicas ocurrido durante los años 2023 y 2024 por parte de 25.000 funcionarios públicos que durante sus respectivos períodos de reposo viajaron fuera del país, situación que fue detectada la Contraloría General de la República en su “Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salidos del país estando con licencia médica”.

En efecto, el inciso final presume la conducta tipificada en su inciso primero, consistente en el “uso de una licencia médica para obtener o mantener indebidamente un subsidio por incapacidad laboral, remuneraciones, o cualquier otro beneficio económico

asociado a dicha licencia”, cuando una persona durante la licencia “saliera injustificadamente del país, o cuyo desplazamiento resulte objetivamente incompatible con la naturaleza o el grado de la incapacidad laboral certificada”

En relación a esta presunción que propone el proyecto de ley, es importante tener presente que se trata de una presunción legal y no de derecho, en consecuencia puede ser desvirtuada con prueba en contrario, ya que como sabemos el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, establece que la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal, rigiendo en consecuencia en nuestro país el principio de presunción de inocencia.

**Fuentes del capítulo: Proyecto de ley “Que fortalece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas, y modifica el Código Penal en los términos que indica”, boletín N° 17.563-11; Código del Trabajo; Código Procesal Penal: Ley N° 21.746, que “modifica la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica”; Código Penal.**

Es todo cuanto puedo informar, 24 de julio de 2025.

**Carlos Lobos Mosqueira  
Abogado**